



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Demandante: SARA ELENA ÁLVAREZ MARTÍNEZ
Demandados: ACP COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A., y PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 005 2022 00005
Sentencia: S-337

AUTO

En atención a la escritura pública 1326 del 11 de mayo de 2022 allegada al expediente, así como la inscripción en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S., se le reconoce personería como apoderada judicial de PORVENIR S.A. a la Doctora MARÍA ALEJANDRA RAMÍREZ OLEA, T.P. 359.508 del C. S. de la Judicatura.

Se accede a la sustitución de poder presentada por el Dr. FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI apoderado judicial de Colpensiones en favor de la Dra. SANDRA MILENA NARANJO SALAZAR, TP 225.677 del C. S. de la Judicatura, con las mismas facultades del apoderado principal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a

resolver los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. y en el grado jurisdiccional de Consulta a favor de Colpensiones, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín el día 05 de mayo de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

SARA ELENA ÁLVAREZ MARTÍNEZ demandó a PROTECCIÓN S.A. a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible, disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de trasladar todos los aportes recibidos. Pretende además se condene a las demandadas a las costas del proceso.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 11 de septiembre de 1968, comenzó a efectuar cotizaciones en el año 1993 al Instituto de Seguros Sociales -ISS-. Desde el mes de mayo de 1995 figura como afiliada a Horizontes S.A. afirmando que no tiene conocimiento de como pudo ser ello posible. Manifiesta que comenzó a trabajar en el mes de septiembre de 1995 en la Notaría Quince de Medellín, y en el año 2000 su empleador convocó a una reunión con los trabajadores para que se trasladaran al fondo de pensiones PROTECCIÓN S.A. Refiere que al momento de traslado de régimen no recibió una información clara, concisa, real por parte de los asesores

del fondo, pues se efectuó una afiliación masiva de personas sin tener en cuenta lo que más le beneficiaba a cada usuario.

Indica que solicitó a PROTECCIÓN S.A. información sobre su afiliación y la historia laboral, y ante Colpensiones el traslado de régimen, mismo que le fue negado.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante, la solicitud de traslado presentada ante esa entidad y su negación. Dijo que no es cierto que la actora estuviera realizando cotizaciones a esa entidad desde el año 1993, pues en la historia laboral solo se evidencia en el año 1994. Sobre los demás hechos manifiesta que no le constan por ser hechos ajenos a esa entidad, razón por la cual deben ser objeto de debate probatorio. Se opuso además a las pretensiones y como excepciones propuso carga dinámica de la prueba, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, improcedencia para decretar la ineficacia de traslado de régimen o inexistencia de la obligación, inexistencia de vicio en el consentimiento, devolución de cuotas de administración -seguros previsionales-comisiones, indexados, prescripción, imposibilidad de condena en costas, compensación, genérica.

PROTECCIÓN S.A. acepta la fecha de nacimiento de la actora y la afiliación al RAIS aclarando que la decisión fue adoptada luego de recibir una asesoría objetiva e integral que la llevó a que firmara de forma libre y voluntaria el formulario de vinculación. Se opuso además a las pretensiones de la demanda al considerar que nos encontramos ante un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento, realizado de forma libre y espontánea. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, ausencia de responsabilidad atribuible a la demandada, inexistencia de la obligación de devolver la comisión

de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, innominada o genérica.

PORVENIR S.A. dice que la actora diligenció el formulario de vinculación ante esa AFP Horizontes, hoy Porvenir S.A., el 31 de marzo de 1995, siendo efectiva a partir del 01 de abril de 1995, advirtiéndole que la misma se realizó luego de entregarle una información completa con el propósito de que la eventual afiliación obedeciera a que la demandante eligiera el régimen que mejor se ajustara a sus intereses, explicándole las características, ventajas y desventajas. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda y como excepciones propuso prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 05 de mayo de 2022, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, i) DECLARÓ la ineficacia del traslado efectuado por la demandante al Régimen de Ahorro Individual por falta de consentimiento informado, lo que derivó error en el consentimiento de la demandante al momento de afiliarse al régimen administrado por la AFP PORVENIR S.A.; ii) DECLARÓ que la afiliación de la actora al RPMPD no ha tenido solución de continuidad en el tiempo en el que ha estado activamente vinculado al Sistema General de Pensiones; iii) CONDENÓ a la AFP PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES, los aportes efectuados por la demandante, incluidos los frutos, rendimientos financieros e intereses, cuotas de administración que sobre los mismos se hubieren causado, el valor de las pólizas previsionales y reaseguros, lo descontado para el fondo de garantía de pensión mínima y para el fondo de solidaridad pensional,

debidamente indexado. Así mismo ORDENÓ a la AFP PORVENIR S.A. a trasladar a Colpensiones iguales conceptos, es decir, lo descontado por comisiones por administración, valor de pólizas previsionales y de reaseguros, lo descontado para el fondo de garantía de pensión mínima y para el fondo de solidaridad pensional, debidamente indexados, en proporción al tiempo que estuvo afiliada la demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, la apoderada de **PROTECCIÓN S.A.** presenta recurso de apelación parcial específicamente en lo relacionado con el traslado de las cuotas de administración y de los seguros provisionales a Colpensiones, puesto que dicho traslado desconoce la gestión administrativa realizada por esa AFP, el derecho a la restituciones mutuas consagrado en el artículo 1746 del Código Civil, además de que se estaría generando un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones entidad que nunca administró la cuenta de ahorro individual de la demandante. Agrega que los descuentos de las cuotas de administración y de seguro provisional son autorizados en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, en igual proporción en el Régimen de Prima Media. Sostiene la recurrente que estos conceptos tienen una naturaleza totalmente diferente a la de la pensión por lo que podría hablarse, inclusive, de prescripción parcial de estas cuotas, también se entiende que están siendo cobradas a las administradoras como un perjuicio, en el presente proceso no obra prueba ni siquiera sumaria de engaño, juramento estimatorio o nexo causal de un daño o una actuación por parte de Protección S.A.

En cuanto al seguro provisional, el traslado a Colpensiones por este concepto estaría afectando a un tercero que sería la aseguradora quien ni siquiera fue vinculada a este proceso. Por las anteriores razones pide se REVOQUE parcialmente la sentencia en estos dos puntos.

El apoderado de **PORVENIR S.A.** interpone recurso de apelación en lo relacionado con los gastos de administración y seguros previsionales inconforme con lo que se anunció en el numeral 3 de la sentencia. Sostiene que devolver los gastos de administración no resulta coherente con la aplicación de la figura de la ineficacia en el entendido de que las consecuencias de la aplicación de dicha figura es asumir que el negocio jurídico nunca se realizó, entonces claramente los frutos dados por la administración de los recursos de la demandante por parte de Porvenir tampoco se generaron. Así mismo, y en lo que corresponde a las sumas previsionales, expone que, apoyado en un pronunciamiento de la Superintendencia Financiera, mientras en el Régimen de Prima Media los afiliados obtienen sus prestaciones en condiciones que ya se encuentran taxativamente reglamentadas en la Ley, en el RAIS los afiliados obtienen sus prestaciones de acuerdo a los valores que hayan ahorrado en su cuenta individual, razón por la cual no es viable dicho traslado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término del traslado concedido a las partes, la apoderada de COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión a través de los cuales solicita se analice nuevamente lo referente a la imposibilidad de traslado de régimen de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 el cual modificó el literal E del artículo 13 de la ley 100 de 1993 y estableció que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren menos de 10 años para adquirir su pensión de vejez.

Manifiesta que, si la ineficacia invocada recae sobre un presunto error al que la parte actora fue inducida en razón a su desconocimiento, solicita se tenga en cuenta que los vicios del consentimiento deben ser probados, no simplemente referenciarse que los mismos se presentaron.

De otro lado dice que, si se considera procedente la ineficacia de afiliación, se ordene al fondo privado la devolución de aportes, rendimientos, gastos de administración y cualquier otro rubro recibido en razón a la afiliación que se está declarando ineficaz.

La apoderada de PORVENIR S.A. señaló que no existían razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual, pues la decisión de la parte actora se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley. Asegura que al momento de realizar el traslado cumplió con su deber de información establecido para la época en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993. De mantenerse la declaratoria de ineficacia de traslado, solicita no se condene al traslado de los dineros descontados por comisiones de administración especialmente por tener una destinación específica conforme lo dispone el artículo 20 de la ley 100 de 1993, valor de pólizas previsionales y de reaseguros, lo descontado para el fondo de garantías de en pensión mínima y para el fondo de solidaridad, y la indexación.

CONSIDERACIONES:

Corresponderá en esta instancia, además de resolver los temas propuestos por los apoderados de las entidades codemandadas a través de sus respectivos recursos de apelación, conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA con el objeto de salvaguardar los intereses de COLPENSIONES, lo que implica revisar la legalidad de la sentencia proferida en primera instancia mediante la cual se declaró la ineficacia de la afiliación de la señora SARA ELENA ÁLVAREZ MARTÍNEZ realizada al RAIS, así como las ordenes consecuenciales respecto a los dineros que cada entidad queda en la obligación de trasladar.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: *(i)* SARA ELENA ÁLVAREZ

MARTÍNEZ nació el 11 de septiembre de 1968; **(ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 16 de junio de 1994, completando en esa entidad un total de 16.71 semanas de cotización; **(iii)** el 31 de mayo de 1995 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP HORIZONTES S.A. hoy PORVENIR S.A.; **(iv)** posteriormente se trasladó a la entonces AFP PROTECCIÓN S.A. según formulario de vinculación del 01 de agosto de 2000, entidad en la que se encuentra vinculada en la actualidad.

Lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS, administrado en este caso por la AFP PORVENIR S.A., y que, en consecuencia, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, no se tuvo en cuenta su situación particular, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto importa reiterar, tal y como se ha dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación. Adicionalmente, se ha establecido que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que el afiliado no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba que acredite que esa obligación sí se cumplió.

Así lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de

septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años, como ha ocurrido por ejemplo en las sentencias SL 12136 de 2014, SL 17595 de 2017, SL 1421 de 2019, SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 2611 de 2020, SL 1741 de 2020, SL 1741 de 2021, SL 3537 de 2021 o más recientemente la SL 1055 del 2 de marzo de 2022 y la SL 2058 del 4 de mayo de 2022, entre muchas otras. Como sentencia-hito sobre el tema, cabe destacar lo que se dijo en aquella primera providencia, la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial citado se pueden evidenciar una serie de ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; (iii) le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y (iv) no es

necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no existen pruebas que permitan tener por acreditado que el fondo privado realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas del afiliado, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que esta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información al afiliado, al no suministrarle, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación, no puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está contravirtiendo en este evento.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Tampoco es de recibo el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, tema frete al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito “... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

Devolución cuotas de administración, seguro previsional y demás conceptos.

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales tema cuestionado en el recurso de apelación de las distintas AFPs, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y

SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”* (Resaltado por la Sala)

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado “... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...”.

Dijo además en esa providencia, que:

“Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima

media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."

En consecuencia, la decisión deberá ser CONFIRMADA, advirtiendo igualmente la Sala que la orden a PROTECCIÓN S.A. y a PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021, rad. 88826).

Todo lo anterior sin que resulte procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

"En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la

CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021)."

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Costas en esta instancia por haber resultado vencidas en el recurso, a cargo de PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 '000.000, distribuidas entre ambas en partes iguales.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, el día 05 de mayo de 2022.

Costas en esta instancia por haber resultado vencidas en el recurso, a cargo de PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y a favor de la demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1 '000.000, distribuidas entre ambas en partes iguales.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7431f5276b125deb62625c01597cbbc1ae91abb2ddf4a26a4cdbfd9192449347**

Documento generado en 15/12/2022 12:01:37 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>